

PLAZA DOMINICAL

Miguel Angel Granados Chapa

Conflicto guanajuatense Y San Luis Potosí, ¿qué?

Se equivocó el doctor Salvador Nava: en vez de convocar a los potosinos para que, hace una semana y hoy mismo, corroboren su decisión de hacerlo gobernador de San Luis Potosí, hubiera pedido a *The Wall Street Journal*, el diario financiero que se edita en Nueva York, que haciendo suya su causa, solicitara, como lo hizo respecto de Guanajuato, nuevas elecciones. A estas alturas, si así hubiera procedido, Fausto Zapata estaría declinando asumir

Viene de la 1

el gobierno de San Luis, que los votantes le negaron y la coyuntura política le entregará en bandeja de plata.

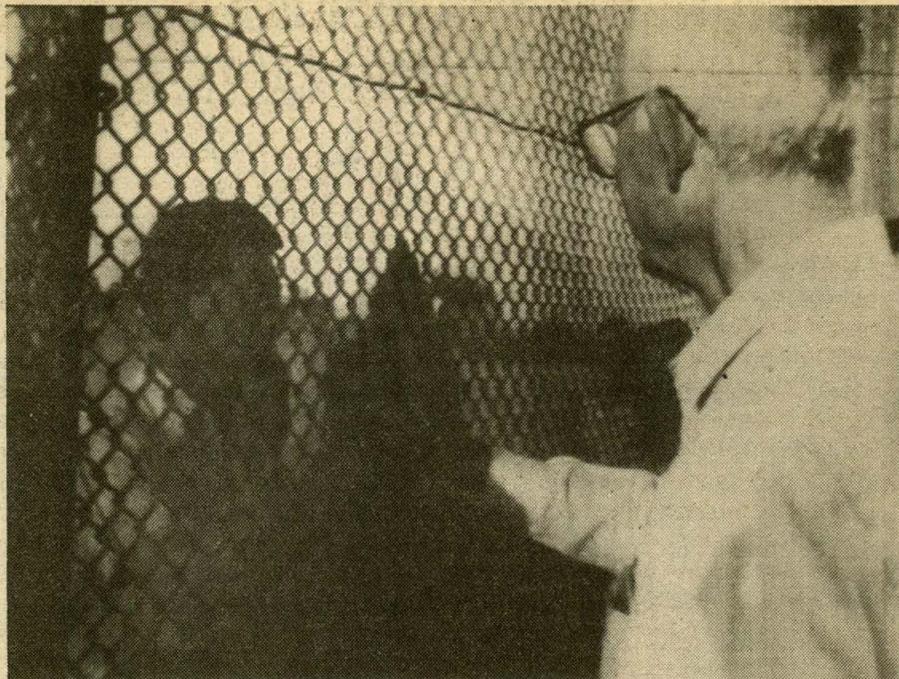
Con el realismo que lo caracteriza, ese periódico centenario juzgó en su editorial del 29 de agosto comprensible que el gobierno de México vacilara "en convocar a una nueva elección si piensa que ganó honestamente, o en establecer el antecedente de realizar una nueva elección cada vez que alguien cause un alboroto".

Pero la situación en Guanajuato y en San Luis dista de ser "un alboroto". En ambos lugares, con características semejantes, se cometieron "marranadas" como con lenguaje poco académico, pero ilustrativo, llama Vicente Fox, el candidato panista guanajuatense, a las graves irregularidades electorales. De allí que el periódico de los negocios norteamericanos añadiera que "el Presidente Salinas necesita hacer algo dramático", como sacrificar a Ramón Aguirre. En nuevos comicios, razonó el editorial del *Journal de Wall Street*, "si el PRI ganó..., puede volver a ganar. Si no lo hace, la pérdida de un gobierno estatal no importaría mucho".

Y he aquí que sus palabras resultaron proféticas. Sólo unas pocas horas después de publicadas esas líneas, lo sugerido en ellas ocurría puntualmente. La pragmática decisión, sin embargo, puede resultar contraproducente, pues los votantes de ninguna de las partes quedarán satisfechos y, en cambio, sus agravios pueden correr por un cauce imprevisto. Porque el propósito político trazado en las alturas puede no ser entendido por quienes sufragaron en favor de Fox y de Aguirre, por no corresponder con sus intereses. Así también, los de la maquinaria de ambos candidatos pueden haber sido perjudicados de modo inadmisiblemente.

La decisión de echar a Aguirre pudo haber sido tomada antes de que recibiera la constancia de mayoría o antes de que se le declarara gobernador electo. De haber ocurrido así, se hubiera ofendido a los priístas pero habrían quedado satisfechas las reclamaciones panistas. Estas se fundaban en abundante documentación sobre trastupijos realizados por el PRI en las elecciones locales. Había una litis legalmente fijada, que pudo resolverse conforme a la ley, ya sea en la Comisión Estatal Electoral o en el tribunal estatal de la materia. Sobraban razones para anular casillas en número suficiente para que la candidatura de Aguirre quedara tachada, o sin efecto las elecciones.

Pero se adoptó la vía combinada del autoritarismo y luego la de la negociación, mezcla que no gratifica a nadie, y por ello la compensación al PAN tuvo que ser más onerosa de lo que pudo haber sido. A la luz del resultado federal, con un virtual *carro completo* en las Cámaras, que hizo perder a Acción Nacional su papel de cogobernante a través del Congreso, era claro que se dañó considerablemente la relación entre los dos partidos que obtienen más alta votación. Los sectores contrarios al diálogo en el PAN empezaron de inmediato a pasar la factura a sus líderes, cobrándoles lo que aparecía como una enorme ingenuidad, la de confiar en el gobierno y su partido. Estos, por su parte, esta-



El dirigente panista, Luis H. Alvarez, durante su entrevista con Ernesto Munro, en la línea fronteriza de San Luis Río Colorado. ■ Foto: José Antonio López

ban urgidos de recomponer esa alianza, al costo que fuera. Por eso se gestó la salida de Aguirre y se filtró la noticia a *The Wall Street Journal*, con el obvio propósito de aprovechar el desenlace en favor de la imagen presidencial en los ambientes financieros norteamericanos. Por eso ese periódico se apresuró a condecorar al gobierno. El viernes mismo, el diario decretó que el despido de Aguirre "puede calmar tensiones y sumar credibilidad a los resultados del reciente proceso electoral".

La postura personal de Aguirre, por cierto, me deja en la perplejidad. No acierto a saber, todavía, si fue un gesto de gran dignidad o su contrario. Me refiero al acto de aparecer en público a dar cuenta de su retiro, no a la decisión misma, que obviamente no fue suya, sino que se le impuso para servir a un cuadro más amplio y complejo de intereses. Su trayecto profesional no muestra actos de gallardía política, de prestancia personal, por lo que su comparecencia ante los medios de prensa el jueves pasado puede reivindicarlo para siempre, por la bravura con que asumió el daño que se le inflige. O puede ser señal de cómo el sistema político obliga a tragar sapos y otras materias, y a sonreír satisfecho con el menú, lo cual rebaja a quien lo acepta hasta la indignidad.

En una noción patrimonialista de los asuntos públicos, desde antes del 18 de agosto se esperaba que algo *diera* el gobierno, en la previsión, superada por las cifras oficiales, de un amplio triunfo priísta. Pero no se limitó a sacrificar a uno de los suyos, llamando a nuevas elecciones, sino que dio un paso más, lo que prueba la intensa necesidad gubernamental de reconciliarse con el PAN. La insólita proposición priísta de nombrar a un gobernador interino panista me hizo recordar la explicación que oí en diciembre de 1982 al entonces secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog, respecto de la premura para reprivatizar la banca, al comienzo de un proceso que culmina por estos días con gran estruendo. Silva Herzog trazó una metáfora: el gobierno-seducor abusó de la confianza de la señorita-iniciativa privada; se entiende que, si la invita a subir de nuevo a su auto (es decir, a trabajar juntos), tenga que ofrecerle garantías seguras e inequívocas de que no volverá a

propasarse.

El nombramiento del alcalde panista de León, Carlos Medina Plascencia, como interino, es la demostración palmaria de cuánto y cómo está urgido el gobierno de restañar las heridas que el 18 de agosto produjo en el panismo. Cuando estaba a punto de conocerse la salida de Aguirre, Diego Fernández de Cevallos enumeraba en la semanal conferencia de prensa del PAN en la ciudad de México los casos en que iban a pelear "con todo". En las próximas horas, esos casos estaban siendo resueltos: la gubernatura de Guanajuato, los ayuntamientos de Guaymas y Puerto Peñasco. Pero a causa de su carácter excepcional, la designación de Medina Plascencia puede provocar efectos no controlables, que hagan trastabillar la construcción pripanista.

Una de esas consecuencias puede aparecer en el mediano plazo, aunque todavía no está claro el panorama en que surgirá. Sería lógico esperar que, en las nuevas elecciones, Vicente Fox repitiera como candidato. Su arrastre quedó probado, y sería una forma de gratificar a los votantes que esta vez sufragaron en su favor y quedaron frustrados por el desenlace de estos episodios. La condición esbozada por Fox mismo, que no quiere que lo hagan tonto una segunda vez, de modificar las reglas del juego, queda virtualmente concedida por la presencia de un panista al frente del gobierno. Sólo se explicaría la ausencia de Fox de esa segunda vuelta si se hubiera negociado que así ocurriera. Y entonces, con habilidad extrema, quien hubiera conseguido tal promesa de retiro, habría eliminado de una vez a las dos principales cartas del panismo en Guanajuato, pues Medina Plascencia era, si cabe, aún mejor candidato que el actual.

El nuevo aspirante tendría que ser, acaso, el diputado Juan Miguel Alcántara. Pero si los foxistas perciben que su opinión resulta incompatible con las conveniencias del partido, quizá hicieran pagar ese desdén al PAN, al menos con su abstención, con lo que Acción Nacional habría hecho a la larga un mal arreglo.

El otro efecto probable, si no es esconográfico puramente, estamos viéndolo ya. No fue posible concluir la sesión en que Medina Plascencia quedaría ungido

governador (para que tome posesión el 26 de septiembre próximo), porque decenas de priístas ocuparon la sede de la Legislatura local. Quieren que no sea aceptada la dimisión de Aguirre o que, de pérdida, el designado sea un priísta. No son cualesquiera los protestantes. Figuran entre ellos los diputados elegidos el 18 de agosto, que asumirán sus cargos dentro de quince días, y reclaman para sí la facultad que está ejerciendo una legislatura que está por terminar sus funciones. Esas actitudes reflejan que, aunque sólo fuera por los intereses dañados desde el centro por el acuerdo con el PAN, el despido de Aguirre y el ascenso de Medina Plascencia pueden abrir de nuevo las fisuras internas del PRI, abiertas durante el proceso de designación de candidato.

Y mientras tanto, ¿qué pasa en el paralelo caso de San Luis Potosí? Cambiando lo que haya que cambiar, sobre todo las invectivas lanzadas por Aguirre a sus adversarios Fox y Muñoz Ledo, el razonamiento esgrimido por el ex regente del Distrito Federal para ausentarse podría ser enteramente suscrito por Fausto Zapata. Si éste quisiera hacer un servicio a los potosinos, en vez de empeñarse en gobernarlos tras pretender ganar a la mala los comicios, debería optar por marcharse. Pero como Aguirre no lo hizo movido por su voluntad propia, tendremos que preguntarnos si se avizora una acción que empuje a Zapata a proceder en el mismo sentido.

Parece claro que el PAN no jugará en San Luis el mismo papel que en Guanajuato. No es tan *su* asunto, y su acuerdo con el gobierno puede restablecerse con sólo la negociación guanajuatense. Porque es claro que en estos acontecimientos lo que menos importa es rendir culto a la transparencia electoral y averiguar el recto sentido de la voluntad popular. Se trata de arreglos de intereses y nada más. Si no fuera así, se pondría en relieve la atroz incongruencia del priísmo, que da un bofetón a sus votantes en aras de una presunta tranquilidad social que si se rompe es por causa del propio priísmo, no por la respuesta de los partidos airados, cuya cólera resulta a fin de cuentas útil. El hecho de que el PAN no haya sostenido por sí solo la candidatura de Nava, sino en una coalición, y la personalidad misma del candidato, así como su estrategia postelectoral, parece haber dispensado a Acción Nacional de su compromiso con el navismo.

Este movimiento cívico, en consecuencia, tendrá que rascarse con sus propias uñas. No tiene nada que ofrecer para una negociación, y por lo tanto no será interlocutor en esos términos. Puede serlo, en cambio, si recupera a partir de hoy su capacidad de movilización. Quedó claro en Guanajuato que, como lo previó Nava, es inútil acudir a las instancias legales para enmendar la arbitrariedad. Tendrá que recurrir, por lo tanto, a otras medidas, legales, civilizadas pero contundentes, hasta hacer comprender al gobierno federal, al Presidente en tanto que jefe de los priístas —condición en que actuó en el caso de Aguirre—, que la prensa extranjera, *The Wall Street* al menos, verá con buenos ojos una muestra de interés por la democracia, aunque no obtenga con ello los frutos de una alianza política, sino sólo el reconocimiento de cientos de miles de potosinos.